Corte Interamericana de Derechos Humanos

Actividades (enero-junio de 1985)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su Duodécimo Período Ordinario de Sesiones durante el mes de enero de 1985. Además de su trabajo normal, la Corte se dedicó a revisar su Reglamento, a la luz de sus cinco años de experiencia. Esta revisión continuará en la próxima sesión.

Debido a la enorme importancia que tienen las buenas relaciones entre los dos órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, varios jueces de la Corte se reunieron en marzo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno, con el propósito de agilizar la llegada de casos a la Corte. Se espera que los obstáculos que han inhibido la presentación de casos contenciosos ante la Corte estén en proceso de desaparecer.

Asimismo, cuatro jueces participaron en la Reunión del Consejo Directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que tuvo lugar en mayo de 1985. El Juez Buergenthal fue reelegido Presidente del Instituto y el Juez Reina uno de los Vicepresidentes.

El 8 de julio, el Gobierno de Costa Rica, consultó a la Corte si la colegiatura obligatoria de periodistas viola las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁽¹⁾. La Corte considerará esta solicitud de opinión consultiva en su XIII Período Ordinario de Sesiones, que se celebrará del 2 al 5 de setiembre. En esa ocasión, la Corte tendrá una audiencia pública sobre el aspecto de la consulta que trata la compatibilidad de la ley costarricense No. 4420

(1) Véase solicitud de opinión consultiva del Gobierno de Costa Rica en págs. 81-84.

y la Convención Americana y decidirá el trámite a seguir en cuanto a la parte general de la consulta.

Asimismo, el Gobierno del Uruguay, el 14 de agosto, solicitó a la Corte su opinión acerca del alcance de la expresión "leyes" empleada en el artículo 30 de la Convención (Capítulo IV –Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación), que trata de las restricciones permitidas al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención⁽²⁾.

Todo lo relativo al trámite de esta consulta, la sexta que se ha presentado a la Corte, se decidirá durante su reunión de setiembre.

Integración de la Corte

–Hasta el 30 de junio de 1985

Pedro Nikken, **Presidente** (Venezuela)

Thomas Buergenthal, **Vicepresidente** (Estados Unidos)

Huntley Eugene Munroe (Jamaica)

Máximo Cisneros (Perú)

Carlos Roberto Reina (Honduras)

Rodolfo E. Piza (Costa Rica)

Rafael Nieto Navia (Colombia)

Charles Moyer, **Secretario**

Manuel Ventura, **Secretario Adjunto**

Ratificaciones a la Convención Americana y Reconocimiento de la competencia de la Corte

Uruguay: 19 de abril de 1985 (ratificación y reconocimiento)

Colombia: 21 de junio de 1985 (reconocimiento)

Actualmente hay 19 Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales ocho (8) han reconocido la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Estos últimos son: Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay y Colombia.

Asamblea General de la OEA (Cartagena de Indias, diciembre de 1985)

En el Decimoquinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, se discutirán

(2) Véase solicitud de opinión consultiva del Gobierno de Uruguay en págs. 85-86.

varios temas de especial interés para la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así, dentro del Proyecto Preliminar de Temario de su XV Período Ordinario de Sesiones, en relación directa a la Corte, figuran la consideración de los siguientes temas:

–Pto. 14. **Elección de cuatro miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyos términos han vencido.** Estos jueces son Thomas Buergenthal, Máximo Cisneros, Huntley Eugene Munroe y Carlos Roberto Reina. Hasta la fecha, se han presentado las candidaturas de Héctor Fix Zamudio (México), Héctor Gros Espiell (Uruguay) y Jorge Ramón Hernández Alcerro (Honduras); el Juez Buergenthal, por su parte, ha sido presentado por Costa Rica y Colombia como candidato a la reelección por otro término de seis años.

–Pto. 20. **Consideración del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.**

–Pto. 22. **Proposiciones sobre el Contenido del proyecto de Protocolo Adicional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.**

Sobre esta materia, la Asamblea tendrá en cuenta, junto a otros informes y antecedentes, las observaciones tanto de los Estados como de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedando pendiente la convocatoria de una conferencia especializada para redactar el Protocolo.

Una vez terminado el Período Ordinario, se celebrará una Sesión Extraordinaria de la Asamblea General con el propósito de estudiar la modificación de la Carta de la Organización. Ya se ha anunciado, que entre otras reformas, se propondrá la inclusión de la Corte, en la Carta enmendada, como órgano de la OEA.

Publicaciones de la Corte

Informes anuales

1980	OEA/Ser.L/V/III. 3, doc. 13
1981	OEA/Ser.L/V/III. 5, doc. 13
1982	OEA/Ser.L/V/III. 7, doc. 13
1983	OEA/Ser.L/V/III. 9, doc. 13
1984	OEA/Ser.L/V/III. 10, doc. 13

Opiniones consultivas emitidas por la Corte

Serie A: Fallos y Opiniones.

Serie B: Memorias, Argumentos Orales y Documentos.

Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982, "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (Artículo 64. Convención Americana sobre Derechos Humanos). (Serie A y B).

Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982, El Efecto de las Reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana (Artículos 74 y 75). (Serie A y B).

Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983, Restricciones a la Pena de Muerte (Artículos 4.2 y 4.4, Convención Americana sobre Derechos Humanos). (Serie A y B).

Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. (Serie A y B).

Solicitud de opinión consultiva del Gobierno de Costa Rica

San José, 8 de julio de 1985

Señor
Charles Moyer
Secretario Ejecutivo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
CIUDAD.

Señor Secretario:

La Sociedad Interamericana de Prensa por medio de su Presidente señor Máximo Gaínza le ha solicitado al Gobierno de Costa Rica que en uso de las potestades que le confiere el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitir una Opinión Consultiva respecto a la interpretación de los artículos 13 y 29 de la Convención. También acerca de la compatibilidad de la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, y las disposiciones de los mencionados artículos.

El Gobierno de Costa Rica ha accedido a plantear esa solicitud de Opinión Consultiva a la Corte, a pesar de advertir que tiene un criterio absolutamente adverso a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el asunto cuestionado, tal y como se reveló en la contestación que el Gobierno de Costa Rica hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso No. 9178 "Stephen Schmidt", y desde ahora desea dejar constancia que está plenamente de acuerdo con la Resolución No. 17/84 emitida por la Comisión en dicho Caso, que por tanto, expresará oportunamente ante esa Corte los argumentos pertinentes.

Ahora bien, en cumplimiento del compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de Prensa, el suscrito se permite remitir adjunto el escrito de solicitud de Opinión Consultiva, según el texto que ha preparado la SIP a solicitud de este Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Gobierno someterá a la Corte sus observaciones escritas en la oportunidad que ésta lo indique, según las disposiciones del artículo 52 del Reglamento de la Corte.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración,

Carlos José Gutiérrez
Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica

Señor
Secretario Ejecutivo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presente.

El Gobierno de Costa Rica, en su condición de Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos y en uso de la potestad que le otorga el artículo 64 de la **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**, muy respetuosamente requiere opinión consultiva de la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** sobre la interpretación y alcances de varias normas de dicha Convención que a continuación se especifican concretamente.

La presente solicitud formal para que la **Corte Interamericana** evacúe la consulta que de inmediato se pormenoriza, la promueve el Gobierno costarricense a instancias de la **SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA**, toda vez que existen serias dudas en Costa Rica y en todo el continente sobre la colegiatura obligatoria de periodistas y reporteros y se han emitido opiniones contrapuestas respecto a la legalidad –al tenor de las normas de la **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**– de ese instituto de la licencia previa.

Dentro del propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre –según lo impone el Preámbulo de la **CONVENCION AMERICANA**–, ante la discrepancia existente, este Gobierno prefiere someter a la **CORTE INTERAMERICANA** la presente consulta, mas reitera que ya ha sido expuesto el criterio del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Reglamento adoptado por la **CORTE INTERAMERICANA**, el Gobierno de Costa Rica formula su petición consultiva en los términos siguientes:

I

Indicación de las disposiciones que deben ser interpretadas y preguntas sobre las cuales se busca opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Las disposiciones sobre las cuales se gestiona interpretación son concretamente, en su totalidad el artículo 13 de la **CONVENCION AMERICANA SO-**

BRE DERECHOS HUMANOS, el cual garantiza a la libertad de expresión del pensamiento y de la información, definiéndolo como el fuero de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento, y los alcances y límites autorizados por dicha norma internacional y el artículo 29 de la misma **CONVENCION**, cuya interpretación también se solicita en lo que se refiere a las únicas limitaciones permisibles a la libertad de expresión del pensamiento y de información –tutelada por el artículo 13 antedicho–, con indicación de a cuáles personas se les puede limitar o restringir dicho fuero humano.

Además de las restricciones especificadas en el artículo 13 referido –cuya interpretación y aclaración se gestiona al tenor de las directrices jurídicas contenidas en la norma 29 *ibidem*–, es de importancia conocer el criterio de la **CORTE INTERAMERICANA** de si un Estado Parte puede mantener o introducir en el futuro, mediante legislación ordinaria, restricciones o limitaciones al derecho tutelado en el artículo 13 de la **CONVENCION AMERICANA**, distintas a las contempladas y autorizadas por dicho artículo y la norma 29 precitada de la **CONVENCION**.

Expuesto el ilustrado criterio de la **CORTE INTERAMERICANA** sobre las normas antedichas, su interpretación y su correcto campo de aplicación, es del caso –y así lo solicita expresamente el Gobierno de Costa Rica–, pronunciarse sobre si existe o no pugna o contradicción entre las leyes internas que establecen la **colegiatura obligatoria** para el periodista en general y, en específico, para el reportero y aquellas normas de la **CONVENCION AMERICANA** citadas, en concreto sus artículos 13 y 29 que contemplan las limitaciones o restricciones por ellos autorizadas.

En Costa Rica, por **Ley No. 4420 del 22 de setiembre de 1969** –de la cual se adjuntan las copias reglamentarias–, en sus artículos 22, 23, 24, 25 y 27, se reservó el ejercicio de la actividad periodística únicamente a las personas inscritas en el **COLEGIO DE PERIODISTAS**, recalándose que el campo del reportero solamente lo podrá cubrir la persona afiliada a dicho Colegio. Semejantes normas en cuanto a la actividad indicada existen, entre otros países latinoamericanos, en República Dominicana, Haití, Ecuador, Panamá, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Honduras y Colombia.

Por consiguiente, la consulta que se formula a la **CORTE INTERAMERICANA** comprende además y en forma concreta, requerimiento de opinión consultiva sobre si existe o no pugna o contradicción entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la actividad del periodista en general y, en especial del reportero –según los artículos ya citados de la Ley No. 4420– y las normas internacionales 13 y 29 de la **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**. En ese aspecto, es necesario conocer el criterio de la **CORTE INTERAMERICANA** respecto al alcance y cobertura del derecho de libertad de expresión del pensamiento y de información y las únicas limitaciones permisibles conforme a los artículos 13 y 29 de la **CONVENCION AMERICANA**, con indicación en su caso de si hay o no congruencia entre las normas internas contenidas en la **Ley Orgánica del Colegio de Periodistas** ya referidas (Ley No. 4420) y los artículos 13 y 29 internacionales precitados.

¿Está permitida o comprendida la colegiatura obligatoria del periodista y del reportero, entre las restricciones o limitaciones que autorizan los artículos 13 y 29 de la **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**? ¿Existe o no incompatibilidad, pugna o incongruencia entre aquellas normas internas y los artículos citados de la **CONVENCION AMERICANA**?

II

Consideraciones que originan la consulta

Como se explicó en la introducción de esta solicitud, la opinión consultiva de la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** la solicita el Gobierno de Costa Rica en su condición de Estado miembro de la Organización de Estados Americanos y en uso de la facultad que otorga el artículo 64 de la **CONVENCION AMERICANA**.

Ante las discrepancias y dudas expuestas, el Gobierno costarricense recurre al ilustrado criterio de la **CORTE INTERAMERICANA** para que se dirima la controversia y, por ello, desea conocer el verdadero alcance del fuero de la libertad de expresión del pensamiento y de información y las únicas limitaciones permisibles al tenor de la **CONVENCION AMERICANA** a ese Derecho Humano. En esta tesitura, es fiel a la tradición democrática y legalista de Costa Rica y está inspirado por el deseo ferviente de lograr cada día un más adecuado funcionamiento al sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos.

Por consiguiente y en cumplimiento del compromiso adquirido de robustecer en el continente la defensa de los fueros básicos de los individuos y, por lo mismo, de despejar las controversias que existen respecto a si la colegiatura obligatoria de periodistas y reporteros contraviene o no la **CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** en sus artículos 13 y 29, el Gobierno costarricense formula la presente solicitud de opinión consultiva.

III

Designación del agente del Gobierno de Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica designa al señor Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, Ministro de Relaciones Exteriores, Agente en los trámites y actuaciones que origine la presente solicitud y al señor Manuel Freer Jiménez, Asesor Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, como Agente Suplente y señala el Ministerio de Relaciones Exteriores como domicilio para atender y recibir notificaciones en el presente procedimiento y ruega darle a este requerimiento el trámite que corresponde al tenor del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos José Gutiérrez
Ministro de Relaciones Exteriores
de Costa Rica

Solicitud de opinión consultiva del Gobierno de Uruguay

Montevideo, Agosto 14, 1985

Sr. Presidente
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Dr. Pedro Nikken
San José

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a fin de solicitar por su elevado intermedio, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al amparo del artículo 64 de la Convención de San José de Costa Rica, acerca del alcance de la expresión "leyes" empleada por el artículo 30 (Capítulo IV -Suspensión de Garantías, Interpretación y Aplicación) que trata de las restricciones permitidas al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención.

Dicha consulta se fundamenta en las siguientes consideraciones:

1. El artículo 30 de la Convención de San José de Costa Rica prevé: "las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas".

2. Cabe preguntarse acerca de la expresión leyes utilizada por la disposición transcrita, en cuanto a si se refiere a leyes en sentido formal -norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo, con las formas requeridas por la Constitución-, o en sentido material, como sinónimo de ordenamiento jurídico, prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico.

3. El derecho constitucional patrio sólo permite la privación de los derechos humanos básicos (los derechos a la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución), mediante "leyes que se establecieron por razones de interés general".

4. Es indiscutible que la expresión leyes tiene para el orden jurídico nacional un sentido unívoco en el caso, que no es otro que el definido por la propia Constitución especialmente en la Sección VII relativa a la Proposición, Discusión, Sanción y Promulgación de las Leyes (arts. 133 a 146).

5. Los procedimientos de ratificación de las convenciones internacionales no son los mismos en los diferentes estados, pudiendo en algunos casos ser ratificados por normas de inferior rango normativo a la ley.

Podría pensarse que si para la ratificación —acerca de lo que cada estado dispone—, puede obviarse la ley, como regla formal, lo mismo podría acontecer en materia de limitaciones a los derechos humanos sancionados por la Convención de San José. Sin embargo, cabe hacer otros comentarios que rectificarian la sugestión anterior.

6. La Convención de San José utiliza lo que en el lenguaje de los métodos de elaboración normativa se denomina como “normas directas” o “materiales”, las que contienen por sí mismas el mandato imperativo correspondiente.

Así, cada norma consagra la protección jurídica de un repertorio de derechos humanos al que la comunidad internacional presta su sistema regulador, imponiéndose en una suerte de supranacionalidad a las previsiones de cada derecho nacional. Dentro de ese contexto normativo, el uso de la expresión leyes por el artículo 30 de la Convención tendría el mismo sentido con que aparece en las legislaciones internas de los países que han participado en la elaboración de la Convención de San José.

Un significado similar tendría la expresión Ley en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948).

7. No sería lógico, ni razonable pensar que una convención dirigida a proteger los derechos humanos pudiera permitir que normas no aprobadas por la ley en sentido formal, los restringieran o limitaran.

8. Jugaría, además, la necesaria armonización de la Convención de San José con los demás instrumentos básicos del sistema jurídico interamericano, en particular la Carta, que hace del “ejercicio efectivo de la democracia representativa” (art. 3.d), uno de los principios de los Estados Americanos.

Obviamente, la democracia representativa se asienta en el Estado de Derecho y éste presupone la protección vía ley de los derechos humanos.

Al agradecer al señor Presidente la atención que pueda tener a bien prestar a esta solicitud, hago propicia la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración.

Enrique V. Iglesias
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Oriental del Uruguay